

# LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN SUDÁFRICA

POR DALE T. MCKINLEY

## CONTEXTO

En 1995, el principal movimiento de liberación de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (ANC) adoptó la Carta de la Libertad como una expresión popular de lo que anhelaba la mayoría de sudafricanos. Una de las disposiciones más importantes de dicha Carta —que el gobierno actual del ANC sigue mencionando en su manifiesto— declara que “se restituirá al pueblo la riqueza nacional de nuestro país, herencia de todos los sudafricanos”.

La mayoría de sudafricanos, compuesta por los pobres y la clase trabajadora, luchó y murió no sólo por alcanzar la libertad política y acabar con el *apartheid*, sino también por la libertad socioeconómica y la justicia, por la redistribución de toda esa “riqueza nacional” de la que el agua es un elemento esencial, pues es un recurso natural indispensable para cualquier forma de vida. Cuando esa mayoría de sudafricanos otorgó la victoria política al ANC, en 1994, entregó también al nuevo gobierno el poder de cumplir con la Carta y de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su raza o clase, controlaran los recursos naturales como el agua y pudieran acceder a éstos. Esta reivindicación popular quedó plasmada en el Programa de Reconstrucción y Desarrollo (RDP), que sentó las bases del contrato del pueblo con el nuevo gobierno democrático. Sin embargo, pasó poco tiempo antes de que el gobierno del ANC abandonara esa reivindicación popular al decidir, de manera unilateral, seguir una política hídrica que ha surtido el efecto contrario.

Antes de que finalizara 1994, el gobierno sudafricano había introducido su política en materia de agua contraviniendo claramente el compromiso expresado en el RDP en lo referente a suministros básicos. Con esto, se autorizó a los funcionarios del sector a suministrar agua sólo si se podían recuperar todos los gastos derivados de las operaciones de explotación, mantenimiento y reparación. En 1996, se adoptó un nuevo enfoque macroeconómico, conocido como Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR), que situó en un marco neoliberal las políticas del agua y de otras necesidades básicas.

Siguiendo los consejos económicos neoliberales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de varios gobiernos occidentales (además de sucumbir al cabildeo de multinacionales privadas del agua, como Suez y Biwater), el gobierno redujo de forma drástica las subvenciones y ayudas otorgadas a los municipios y ayuntamientos, y apoyó el desarrollo de instrumentos financieros para privatizar el suministro. Esto obligó a los gobiernos locales a recurrir a la privatización y concesión de las empresas públicas de agua como un medio para generar los ingresos que el estado había dejado de proporcionar. Así, muchas estructuras de gobiernos locales comenzaron a privatizar o mercantilizar las empresas públicas de agua acordando “asociaciones” de servicio y gestión con multinacionales del sector.

## EL IMPACTO

El efecto inmediato fue el aumento espectacular del precio del agua que, por fuerza, perjudicó especialmente a las comunidades pobres y que era fruto de la política de inspiración neoliberal que aboga por la recuperación de los costes, es decir, por hacer que la gente pague por los costes asociados a las infraestructuras hídricas. Bajo el *apartheid* (1993), los barrios negros situados en torno a la ciudad de Fort Beaufort, en la provincia del Cabo Oriental, pagaban una tarifa fija de 10,60 rand por todos los servicios, incluida el agua y la eliminación de residuos.<sup>1</sup> Bajo la priva-

1. En septiembre de 2005, 1 rand sudafricano = 0,15 dólares estadounidenses / 0,12 euros.

tización (Suez), de 1994 a 1996, los cargos por los servicios se incrementaron en un 600% y alcanzaron los 60 rand mensuales. Se impuso asimismo un aumento del 100% sobre el precio de conexión a la red hídrica. En Queenstown, otra ciudad de la misma provincia, se reveló un panorama parecido, ya que el precio de los servicios aumentó un 150%. En la ciudad nororiental de Nelspruit (Biwater), donde el índice de desempleo ronda el 40% y el ingreso anual medio de un hogar negro es de apenas 1.200 rand, el precio del agua suministrada a las comunidades negras subió nada menos que un 69%. Así pues, la política de recuperación de los costes provocó una crisis de asequibilidad nacional, tanto para los barrios negros como para las comunidades rurales.

Estos primeros aumentos de precio se vieron exacerbados posteriormente por la necesidad de “recuperar” los enormes costes adicionales asociados al Proyecto Hidráulico de las Tierras Altas de Lesotho, financiado por el Banco Mundial. (El proyecto preveía la construcción de presas para suministrar agua a la mayor ciudad de Sudáfrica, Johannesburgo, y a algunas grandes industrias mineras y manufactureras vecinas.) La primera subida de precios que se produjo en cuanto se privatizó el servicio de agua en Johannesburgo (la empresa Johannesburg Water Company, una filial sudafricana de Suez) fue del 55%, una cantidad realmente astronómica. A pesar de la firme oposición del movimiento sindical, sobre todo del sindicato sudafricano de trabajadores municipales, y de los incipientes movimientos sociales (surgidos principalmente en los contextos urbanos), el gobierno no cejó en su propósito de privatizar el agua.

Siguiendo al pie de la letra el consejo del Banco Mundial de introducir una “amenaza creíble de cortar el servicio”, el ayuntamiento de Johannesburgo y otros ayuntamientos de todo el país comenzaron a cortar el servicio de agua a los hogares que no podían permitirse el aumento de los precios. El modelo de recuperación total de los costes fomentado por el Banco Mundial —a saber, ingresos en concepto de tarifas suficientes para cubrir los costes de explotación y mantenimiento sin la ayuda de subvenciones públicas para mantener los precios a raya— ha representado la pérdida del servicio hídrico para más de 10 millones de personas. Además, más de dos millones de ciudadanos se

han visto desahuciados de sus hogares, a menudo como consecuencia del proceso legal asociado a la recuperación de los costes de los “clientes” pobres. Las comunidades que antes no disponían de acceso a agua potable han corrido la misma suerte desde que se les proporcionó la infraestructura o, simplemente, se las han tenido que apañar extrayendo agua de arroyos contaminados y de pozos alejados de sus hogares.

El impacto colectivo de la privatización del agua sobre la mayoría de los sudafricanos ha sido verdaderamente devastador. La búsqueda desesperada de cualquier fuente disponible de agua ha desembocado en brotes de cólera que se han cobrado la vida de cientos de personas. En la provincia de Kwa-Zulu Natal se produjo, en 2000, el mayor brote de cólera del país después de que el sistema gratuito de surtidor comunal se convirtiera en un sistema (privatizado) con contadores de prepago. Más de 120.000 personas contrajeron el cólera y más de 300 murieron.

Poco después de que la multinacional francesa Suez se hiciera cargo del suministro de agua en Johannesburgo, miles de familias del barrio de Alexandra se vieron afectadas por un brote de cólera. En ambos casos, la epidemia sólo consiguió controlarse después de que el gobierno, presionado por la movilización popular, tomara cartas en el asunto. Los sistemas inadecuados de saneamiento e higiene de “autoservicio” también han expuesto a la población, especialmente a los niños, a una serie de enfermedades evitables. La contaminación y la degradación medioambiental han empeorado debido al vertido incontrolado de aguas residuales y a la escasez de agua para producir alimentos. Por si esto fuera poco, se ha arrebatado la dignidad a comunidades enteras, y el derecho al agua, una de las necesidades humanas más básicas, se ha convertido en un privilegio reservado únicamente a aquellos que se lo pueden permitir.

## LA LUCHA DE LAS COMUNIDADES

Ante estas medidas privatizadoras, las comunidades de grandes zonas urbanas, como Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo, así como de muchas otras ciudades menores y zonas periurbanas de todo el país, han respondido mediante la resistencia activa. Uno de los nuevos

movimientos sociales que ha encabezado dicha resistencia es el Anti-Privatisation Forum (APF), una plataforma de grupos de base establecidos principalmente en la provincia de Gauteng (donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria). Creado en 2000, el APF se ha guiado por el principio de que las necesidades básicas, como el agua, son un derecho humano básico y no un lujo del que pueden disfrutar sólo los privilegiados que pueden pagar por él.

Durante el proceso de privatización, el APF —junto a otros movimientos sociales y, en menor grado, el movimiento sindical— ha movilizad y organizado a comunidades y trabajadores pobres para que luchen contra él. Con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos de a pie las herramientas necesarias para reivindicar su derecho a servicios básicos gratuitos (agua, electricidad, educación y vivienda), se han combinado iniciativas divulgativas y legales con acciones masivas periódicas. Como resultado, a fines de 2003, se formó una plataforma contra la privatización del agua, la Coalition Against Water Privatisation (CAWP), con la idea de aglutinar a una serie de movimientos sociales y ONGs progresistas en una campaña colectiva para detener la oleada de privatizaciones.

Con la ayuda del APF y de la CAWP, los ciudadanos han iniciado una campaña llamada Operación Vulamanzi (“agua para todos”), que ha ayudado a superar algunos de los obstáculos físicos que se usan para controlar el agua privatizada, como son los contadores de prepago y los sistemas de goteo. También se han desviado cañerías para permitir el acceso libre al agua y, de este modo, romper una lanza de base a favor de la “desmercantilización” del agua y de la autocapacitación de la comunidad. En algunas comunidades, los vecinos han destruido los contadores de prepago en un claro acto de desafío al suministro privatizado de agua.

Los políticos del ANC y los burócratas del gobierno, mostrando su desprecio por los derechos constitucionales y humanos de los pobres, han calificado públicamente a aquellos que se oponen a la privatización de criminales y anarquistas que desean crear una “cultura del impago”. Estos ataques verbales han ido acompañados de medidas enérgicas a gran escala contra la disidencia y la resistencia de las comunidades. Durante los tres últimos años, se ha arrestado y encarcelado a cientos de activistas y vecinos.

Si bien estas luchas contra la privatización no han logrado detener el proceso, la presión popular obligó al gobierno a poner en marcha una política parcial de agua gratuita a fines de 2002. Sin embargo, sigue habiendo millones de personas que no reciben los 6.000 litros “gratuitos” de agua por hogar y por mes garantizados por esta política, un volumen que ni siquiera cubre las necesidades de saneamiento básicas de un hogar medio. (La Organización Mundial de la Salud estipula que se necesita un mínimo de 100 litros de agua por persona y por día. Si una familia media —negra, urbana o rural— está formada por ocho personas, el mínimo necesario sería de 24.000 litros mensuales por hogar.)

La resistencia de base a la privatización también ha contribuido al fracaso o a la renegociación de muchos proyectos para la privatización del agua en Sudáfrica.

Es en este contexto en el que el APF y la CAWP siguen intensificando la campaña contra la privatización del agua en todas sus formas. Y es a través de estas campañas mediante las que la mayoría se ha situado, una vez más, en la vanguardia de la lucha por la dignidad y los derechos humanos fundamentales.

#### SEMBRANDO LAS SEMILLAS DE UNA ALTERNATIVA

En Sudáfrica, la resistencia a la privatización del agua sigue sembrando las semillas de una alternativa. Una de esas semillas se halla en la capacidad de las comunidades pobres para minar el suministro privatizado, tanto política como físicamente, en la fase del “consumo”. No sólo se trata de un acto de autoemancipación, sino que sienta las bases a partir de las que la mayoría de sudafricanos pueda reivindicar cambios políticos y estructurales en la propiedad y la distribución del agua y de otros servicios básicos esenciales para la vida.

En estos momentos, entre las demandas que siguen reivindicando el APF y la CAWP, se encuentran las siguientes:

- La criminalización de la disidencia y de la resistencia a la privatización del agua deben detenerse de inmediato.

- Los contadores de prepago deben ilegalizarse inmediatamente y retirarse de las comunidades pobres donde se han instalado. Deberían substituirse por un sistema hídrico de máxima presión y de volumen ilimitado por el que se cobrara una tarifa fija mensual de 10 rand.

- El gobierno debe acabar con su política de privatización del agua y del resto de servicios básicos rescindiendo todos los contratos “por servicios” y los acuerdos de “gestión” con las grandes empresas privadas de agua.

- Debe aplicarse sin dilación una política de subvenciones cruzadas (de las grandes empresas y de los ciudadanos ricos hacia las comunidades pobres) para favorecer el suministro de servicios gratuitos de agua a los pobres. El gobierno debería acompañar esta medida con la condena de la deuda del *apartheid* y con el uso de inversiones que fomenten el suministro gratuito de servicios básicos.

- El gobierno debe asumir un firme compromiso fiscal y político para tender una infraestructura de acceso universal (sobre todo en las zonas rurales) que no esté sujeta a ningún mecanismo de “recuperación de los costes”, y esta iniciativa debe ir de la mano de la participación significativa de las organizaciones comunitarias y populares de aquellas zonas más necesitadas en infraestructuras.

- El gobierno debe declarar públicamente que todos los sudafricanos tienen un derecho constitucional y humano al agua, garantizando que la propiedad, la explotación y la gestión de estas empresas estén en manos públicas con miras a suministrar servicios básicos gratuitos a todos los ciudadanos. Con el tiempo, esa “propiedad pública” debería adoptar la forma de asociaciones entre comunidades y trabajadores, en las que las organizaciones de las comunidades y los trabajadores del sector público gocen de igualdad de participación y de control democrático.

## SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Es lamentable que muchas ONGs, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones comunitarias internacionales progresistas sigan apoyando las políticas socioeconómicas del gobierno del ANC

con la falsa creencia de que representan un auténtico reflejo de la “lucha permanente por la liberación nacional”. El APF, la CAWP y otras organizaciones y movimientos aliados de Sudáfrica exhortan a aquellos que forman parte de los movimientos por la justicia mundial y contra la globalización capitalista a actuar en solidaridad con nosotros. La primera muestra solidaria debería consistir en un mayor contacto y en el intercambio de información sobre el carácter de nuestras respectivas luchas. Agradecemos también que se haga correr la voz sobre las privatizaciones en Sudáfrica, que se participe en actos de protesta ante las embajadas y los consulados de Sudáfrica y cualquier mensaje de solidaridad. Animamos también a los activistas a escribir artículos políticos, tanto en medios progresistas como convencionales. En esta etapa del movimiento contra la privatización en Sudáfrica, es también de crucial importancia conseguir financiación para nuestra defensa legal. El APF y la CAWP no pueden cubrir todos los gastos que se necesitan para defender al gran número de activistas arrestados y enfrentados a los tribunales y, con el refuerzo de la campaña, esa necesidad aumentará aún más en breve.

Los ciudadanos de todo el mundo han empezado a unirse por la defensa del derecho humano al agua. Ya sea en Cochabamba, Bolivia, o en Accra, Ghana, en Atlanta, Estados Unidos, o en Buenos Aires, Argentina, en Manila, Filipinas, o en Johannesburgo, las campañas actuales contra la privatización del agua alzan sus voces al unísono por la desmercantilización de este bien común y por la creación de servicios del sector público en que se observen un control y una participación verdaderamente democráticos con el fin de cubrir las necesidades de las personas.

*Dale T. McKinley es responsable del departamento de prensa del Anti-Privatisation Forum y presidente en funciones de la Coalition Against Water Privatisation.*

Más información: [drdalet@metroweb.co.za](mailto:drdalet@metroweb.co.za) o [dale@apf.org.za](mailto:dale@apf.org.za)  
Si desea realizar una aportación económica, visite <http://www.apf.org.za>